

Santiago, veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

En estos autos RIT O-340-2022, RUC 2240428195-3, del Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, por sentencia de diez de febrero de dos mil veintitrés, se dio lugar en forma parcial a la demanda declarativa de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones, deducida por don Fabián Andrés Sarmiento Sanhueza en contra de la Municipalidad de Chillán.

Ambas partes presentaron recursos de nulidad que fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Chillán, mediante sentencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés.

En contra de este fallo, la demandada interpuso recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en una o más sentencias firmes emanadas de los tribunales superiores de justicia. La presentación debe contener fundamentos plausibles, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos ejecutoriados que se invocan como criterios de referencia.

**Segundo:** Que la materia de derecho propuesta consiste en “*determinar la procedencia de que mi representada deba enterar las cotizaciones previsionales, de salud y seguridad social del período declarado como relación laboral, pese a que, en todos los contratos de prestación de servicios suscritos con el demandante, se obligó a enterarlas en conformidad a lo previsto en la Ley N°20.255*”.

Para la recurrente, la obligación de enterar las cotizaciones previsionales correspondía al prestador de servicios, ya que en cada contrato suscrito por las partes se consignó su deber de pagar tales montos en concordancia con lo dispuesto en el Título IV de la Ley N°20.255, concluyendo que en esta parte fue erróneamente condenada, razones por las que solicita se resuelva, en definitiva, el rechazo de dicha pretensión.

**Tercero:** Que, para decidir, se deben considerar en forma previa los hechos establecidos en la instancia:

1.- El demandante, don Fabián Andrés Sarmiento Sanhueza, fue contratado a honorarios por la Municipalidad de Chillán, permaneciendo vinculadas las partes, sin solución de continuidad, desde el 31 de julio de 2017 al 22 de agosto de 2022.



2.- En todos los contratos a honorarios se consignó la siguiente cláusula: “*el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la Ley 20.255, la cual establece que los trabajadores a honorarios estarán obligados a realizar las cotizaciones previsionales para pensiones, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, salud y las obligaciones que dicha norma le impone para concretar tal cotización*”.

3.- Las cotizaciones de seguridad social devengadas durante dicho período, se mantienen impagas, que tampoco fueron enteradas por la demandada.

**Cuarto:** Que tras reconocer la naturaleza laboral de la vinculación contractual descrita, la judicatura de la instancia tuvo presente para resolver el asunto discutido lo dispuesto en los artículos 58 del Código del ramo y 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, de cuyo tenor concluyó que las cotizaciones de seguridad social constituyen un gravamen obligatorio que afecta las remuneraciones que perciben los trabajadores, que el empleador debe descontar y enterar en las respectivas administradoras de fondos dentro del plazo fijado por la ley, por lo que su incumplimiento debe ser sancionado con la condena a pagar las sumas adeudadas por dicho concepto.

La Corte de Apelaciones de Chillán, conociendo el respectivo recurso de nulidad, sostuvo que la sentencia declarativa dictada en la instancia reconoce una situación fáctica preexistente que debe ser tratada de acuerdo a las normas aplicables a los trabajadores sujetos al citado código, careciendo de incidencia las invocadas por la recurrente contenidas en la Ley N°20.255, que afectan sólo a los que tienen la calidad de independientes, por lo que la obligación previsional se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones al actor, sin perjuicio de la denominación asignada en los respectivos contratos, concluyendo que la calificación jurídica de los hechos comprobados y la interpretación de las normas atinentes fueron correctas.

**Quinto:** Que, para acreditar la existencia de interpretaciones contradictorias, la demandada presentó las sentencias dictadas por esta Corte en los autos Rol N°1.597-2020 y 119.187-2020, de 21 de julio de 2021 y 21 de abril de 2022, y por la Corte de Apelaciones de Chillán en causas Rol N°21-2022 y 25-2022, de 3 y 1 de marzo de 2022, respectivamente.

En los fallos pronunciados por esta Corte, tras declarar el carácter laboral de la relación contractual a honorarios que vinculó a las partes, se decidió, en el primero, que “*no se concederán las cotizaciones de seguridad social reclamadas, porque se estableció que la actora se obligó a enterarlas en los organismos pertinentes, en concordancia con lo establecido en el Título IV de la Ley N°20.255*”; y, en el segundo, que resulta “*improcedente el pago de las*



*cotizaciones de seguridad social, puesto que, también, se acreditó y según se consignó en cada uno de los contratos, que el demandante se obligó a enterar su monto en las instituciones previsionales correspondientes, en los términos previstos en la Ley N°20.894, antecedente que, asimismo, obsta a acceder a la nulidad del despido, por no concurrir los requisitos exigidos en el artículo 162 del Código del Trabajo... En efecto, y tal como se razonó por esta Corte en los autos Rol N°1.597-2020, no es procedente condenar a la demandada a pagar las cotizaciones de seguridad social, porque, como se indicó, el actor se obligó a enterarlas en los organismos pertinentes, en concordancia con lo establecido en las Leyes N°20.255 y 20.894”.*

*En las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Chillán se decidió, en la primera, que “en cuanto al pago de las cotizaciones previsionales, se debe tener presente lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en la sentencia de Unificación de Jurisprudencia Rol N°1597-2020, en un caso análogo, donde se determinó que no correspondía pagarlas a la parte demandada, en razón que la actora se obligó a enterarlas en los organismos pertinentes, en concordancia con lo establecido en el Título IV de la Ley 20.255. Y en el caso de autos, de acuerdo al último contrato de prestación de servicios, así como en los anteriores se pactó que los costos de previsión social correspondientes a Cotizaciones de Salud y AFP como del pago mensual del organismo administrador del Seguro Social contra riesgos por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales será de cargo del ‘prestador’. En este sentido el prestador deberá dar cumplimiento a lo señalado en la Ley N°20.255, Decreto Ley 3.500 y su reglamento contenido en el Decreto 57, de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dicen relación con el pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores independientes obligados a cotizar. Por lo que de acuerdo a lo razonado y antecedentes referidos, se rechazará dicho pago conforme lo solicitado por el demandante en su demanda”; y, en la segunda, que “al examinar los contratos de trabajo de prestación de servicios de los actores, se estableció que: ‘Será obligación única y exclusiva del prestador de servicios dar cumplimiento de lo establecido en la Ley No 20.255 y Ley 20.894, que establecen la obligatoriedad a partir del año 2018, sobre el entero de las cotizaciones previsionales para pensiones, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, salud, y las imposiciones que dicha norma le impone para concretar tal cotización. Por lo tanto, dicha normativa se entiende forma parte expresa del presente Contrato para todos los efectos legales y contractuales’... Así entonces no se podrá conceder el pago de las cotizaciones de seguridad social reclamadas, ya que se estableció en la cláusula antes transcrita del contrato de trabajo, que los actores se obligaron a*



*enterarlas en los organismos pertinentes, en concordancia con lo establecido en el Título IV de la Ley 20.255 y Ley 20.894”.*

**Sexto:** Que, por lo señalado, se advierten interpretaciones divergentes sobre la materia de derecho propuesta, relacionada con la obligación de la demandada de pagar las cotizaciones previsionales devengadas durante la vigencia de la relación que la sentencia de la instancia califica de naturaleza laboral, cuando las partes acuerdan a través de una cláusula inserta en los respectivos contratos a honorarios que tal carga será asumida por el trabajador.

**Séptimo:** Que la premisa está dada por el reconocimiento de la orden contenida en el artículo 58 del Código del Trabajo, que impone al empleador deducir de las remuneraciones de los dependientes *“las cotizaciones de seguridad social”*, tratándose de un descuento de carácter obligatorio que las afecta, cuya naturaleza imponible es determinada por la ley, lo que hace inexcusable su cumplimiento, como lo refuerzan y precisan los artículos 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, que establecen la obligatoriedad del sistema para los afiliados menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres y menores de sesenta años si son mujeres, y señalan que es el empleador quien debe declarar y pagar las cotizaciones en los organismos pertinentes dentro de las fechas que indican.

Además, para sostener la vigencia de tal obligación, sin perjuicio de que la relación, en su origen, no sea reconocida como laboral por las partes, se ha acudido a la presunción contenida en el artículo 3 inciso segundo de la Ley N°17.322, atendidos los argumentos previos y el carácter declarativo que tiene la sentencia respectiva, que esta Corte ha reconocido invariablemente como se advierte en las dictadas en los autos Rol N°6.604-2014, 9.690-2015, 40.560-2016, 76.274-2016 y 3.618-2017, entre otras.

Tales razonamientos son comprensivos tanto de las cotizaciones previsionales como de aquellas que financian el seguro de cesantía reglado en la Ley N°19.728, atendido el tenor literal del citado artículo 58, que al establecer la ya referida obligación alude a las *“cotizaciones de seguridad social”*, misma formulación amplia que utilizan los artículos 1 y 3 de la Ley N°17.322; y que, por lo demás, corresponde a la judicatura dar eficacia a los derechos consagrados en el artículo 19 números 9 y 18 de la Constitución Política, que impone al Estado garantizar el acceso de todos los habitantes a las prestaciones de salud y seguridad social, lo que dada la configuración que la legislación ha hecho del sistema, supone velar por el oportuno cumplimiento del deber de aportar a financiar los sistemas que las administran, sea de manera directa para los trabajadores independientes o a través de la retención del empleador para los dependientes. A lo anterior, se debe agregar que la protección en materia de



cesantía también es obligatoria en favor de los aquellos regidos por el citado código, de modo que el inicio de la relación laboral de un dependiente no sujeto al seguro generará su incorporación automática a éste y el deber de cotizar en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley N°19.728 y, en caso de incumplimiento, su artículo 11 prevé un sistema de cobro y sanciones similar al del Decreto Ley N°3.500, haciéndole aplicable numerosas normas de la Ley N°17.322, que regula la cobranza judicial de las cotizaciones adeudadas. De manera que por los fines que satisface este seguro, el carácter perentorio y universal con que se ha impuesto, y por la técnica de pago y cobro de las sumas que contribuyen a financiarlo, no cabe sino concluir que se trata de una prestación de seguridad social a efectos de lo previsto en el aludido artículo 58, por lo que, en principio, y sin perjuicio de lo que se precisará, si la obligación no fue cumplida durante la vigencia del contrato, deberá serlo con posterioridad.

Por consiguiente, acreditado que el empleador no cumplió con tales obligaciones durante la vigencia del vínculo, la condena debe incluir la de entero de las cotizaciones previsionales y de cesantía.

**Octavo:** Que, sin perjuicio que la legislación impone al empleador el pago de las cotizaciones de seguridad social, previo descuento al trabajador, asignándole el rol de agente retenedor, lo cierto es que cuando éste solventa directamente sus cotizaciones en las instituciones pertinentes, sea porque así lo decidió en forma voluntaria o porque lo acordó con su empleador, incorporando una cláusula en tal sentido en el contrato a honorarios mediante el cual se formalizó la vinculación en su origen, se trata de una conducta a la que debe darse valor, pues beneficia su situación previsional, permitiéndole acceder a prestaciones de salud y/o cesantía, e incrementar los fondos con que financiará su futura pensión.

En ambos casos, esto es, pago voluntario de las cotizaciones por el dependiente o existencia de una cláusula en el contrato que así lo dispone, este tribunal se ha pronunciado previamente reconociendo los efectos jurídicos de tales acciones, al entender que por su intermedio se cumple la finalidad perseguida por la norma, en cuanto a que el trabajador pueda acceder efectivamente a las prestaciones que le garantiza la Constitución Política de la República en su artículo 19 número 18.

En efecto, tratándose del primero caso, desde la sentencia dictada en causa Rol N°35.653-2021, seguida de las emitidas en los ingresos N°41.026-2021, 98.552-2022 y 106.732-2023, entre otras, se sostiene sin variación la improcedencia de condenar al pago de las cotizaciones de seguridad social cuando el dependiente las entera directamente ante los organismos respectivos,



porque el objetivo perseguido a través de la obligación consagrada en el artículo 58 del Código del Trabajo, también se puede alcanzar cuando es aquél quien paga sus cotizaciones de seguridad social, evitando la existencia de lagunas en su cuenta de capitalización, habilitándolo para acceder a los beneficios que financian, por lo que no hay un daño previsional que reparar, procediendo la condena sólo cuando las referidas prestaciones no han sido previamente enteradas y en la parte que se adeude.

En el segundo caso, esto es, cuando el trabajador asumió el entero de tales montos mediante una estipulación incorporada en el contrato de honorarios respectivo, sea que haya cumplido con la obligación o no, la conclusión es la misma, lo que aparece como una consecuencia de lo razonado a propósito de la aplicación de la sanción de la nulidad del despido a este tipo de casos, dado el origen de la vinculación y la presunción de legalidad que la amparó, lo que permite dar valor a este tipo de cláusulas que no serían procedentes en un contrato de trabajo ordinario, nacido del acuerdo de voluntades de quienes aceptan obligarse en los términos descritos en el artículo 7 del Código del ramo.

En la sentencia dictada en causa Rol N°98.552-2022, se declaró que, si el actor se obligó a enterar directamente las cotizaciones en los organismos pertinentes, cualquier deuda que pueda existir y perjuicios que se deriven serán consecuencia de su propio incumplimiento, por lo que no hay un daño previsional imputable al organismo demandado.

Esta última hipótesis con la sola excepción de las prestaciones destinadas a financiar el seguro de cesantía establecido por la Ley N°19.728, pues la estipulación cuyos efectos jurídicos se reconocen, supone que el trabajador, formalmente denominado prestador de servicios durante la vigencia del vínculo, debió asumir directamente el pago de sus cotizaciones de seguridad social en conformidad a lo dispuesto por la Ley N°20.055, que, sin perjuicio de su entrada en vigencia diferida en este punto, modificó el Decreto Ley N°3.500, de 1980, entre otros cuerpos legales, e hizo obligatorio para los independientes el pago de los montos destinados a financiar los sistemas previsionales, de salud común (Isapre y Fonasa) y profesional, pero no consideró las del seguro de cesantía, que, en consecuencia, nunca se entendieron incorporadas en los pactos, por lo que una vez esclarecida la naturaleza del respectivo contrato, deben ser solucionadas por el empleador en los términos que más adelante se indicarán.

**Noveno:** Que, en conformidad a lo previamente expuesto, es posible asentar que la regla en materia de cotizaciones de seguridad social, esto es, previsionales y de cesantía, es la vigencia de la obligación de pago por parte del empleador, salvo que tratándose de contrataciones originadas en un convenio de



prestación de servicios suscrito con un órgano de la Administración del Estado, amparado en su origen por la presunción de legalidad y en que el prestador tuvo durante su vigencia la apariencia de trabajador independiente, las partes hayan hecho de su cargo el cumplimiento de la obligación o, sin tal pacto, que éste las haya enterado directamente, sea en forma total o parcial.

En consecuencia, de no existir tal cláusula en el respectivo contrato de prestación de servicios y siempre que el pago de las cotizaciones no haya sido totalmente solucionado por el trabajador, deberá ser cumplida la obligación por el empleador, lo que conduce a otra arista del problema, referida a las sanciones que la legislación impone al empleador que paga fuera del plazo que la normativa establece, puesto que, de acuerdo a los incisos séptimo, décimo y undécimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y a los artículos 21 y 22 letra a) de la Ley N°17.322, la falta de declaración y pago oportuno de las cotizaciones previsionales queda sujeta a una multa a beneficio fiscal, además de incrementarse su monto con los reajustes e interés penal que contemplan.

Sin embargo, como a propósito de la aplicación a este tipo de casos de la institución consagrada en el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo, se ha reconocido que los órganos de la Administración del Estado no podían, de acuerdo a la normativa y las reglas presupuestarias que los rigen, pagar libremente las cotizaciones de sus prestadores de servicios a honorarios durante la vigencia del vínculo, requiriendo para convalidar el despido, una vez calificada tal relación como laboral, de un pronunciamiento judicial condenatorio, estando, en definitiva, de buena fe y amparados por la mencionada presunción de legalidad, concluyéndose que no puede tenérseles como deudor en mora o incumplidor para estos efectos, pues resultaría contradictorio no sancionarlos con la declaración de nulidad del despido, para luego imponerles multas e intereses penales.

Lo anterior, conduce a que las cotizaciones a que resulte condenado este tipo de empleador, amparado por la referida presunción, deberán incrementarse con reajustes, calculados desde la oportunidad que indica el inciso décimo del artículo 19 del Decreto Ley N°3.500 y el inciso tercero del artículo 22 de la Ley N°17.322, y con intereses, los que sólo se devengarán desde la época en que el fallo que declaró el carácter laboral del vínculo quede ejecutoriado y sobre una base diversa a la establecida en el Decreto Ley N°3.500 y en la Ley N°17.322, ya que, considerando lo dicho, se descarta la aplicación de recargos penales, de manera que deberán ser determinados en conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 63 del Código del Trabajo.

Además, a fin de mantener la debida concordancia con los razonamientos antes expuestos acerca del origen del contrato celebrado entre las partes, el cobro



de dichas cotizaciones deberá excluir las multas a que aluden los artículos 19 inciso séptimo del Decreto Ley N°3.500 y 22 letra a) de la Ley N°17.322.

**Décimo:** Que, por último, en materia de cotizaciones de seguro de cesantía debe efectuarse una prevención adicional, dado que su financiamiento, a diferencia de lo que ocurre en cuanto a previsión y salud, es tripartito, conformándose por aportes del trabajador, del empleador y del Estado. Tratándose de dependientes con contrato indefinido, como ocurre en este caso, la contribución al seguro, según lo prevé el artículo 5 de la Ley N°19.728, se divide en un 0,6% de las remuneraciones imponibles de cargo del trabajador, un 2,4% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador y un aporte del Estado que corresponde a un monto global que se entera anualmente.

Entonces, sobre la base de lo dicho, en el caso del trabajador que no registra pago de estas cotizaciones durante la vigencia del contrato, sea efectuado por él o por su empleador, se declarará que éste debe solucionarlas, incluyendo tanto el porcentaje que es de su cargo como aquel que debió descontar oportunamente de la remuneración, dado que la legislación obliga que ambas fracciones sean solucionadas durante la vigencia de la relación laboral, lo que en la especie no fue cumplido.

Por otra parte, de ordenarse el cumplimiento parcial de la obligación, limitado únicamente al porcentaje financiado por el empleador, se estarían perjudicando las futuras prestaciones a las que el trabajador pueda acceder con cargo a estos pagos, razonamientos que conducen a modificar lo que, en el último tiempo, se había decidido a este respecto.

**Undécimo:** Que los razonamientos previos deben ser contrastados con los hechos asentados y los antecedentes allegados por las partes, de los que se desprende que la relación laboral se desarrolló entre el 31 de julio de 2017 y el 22 de agosto de 2022, siendo formalizada a través de una sucesión continua de contratos de prestación de servicios a honorarios, advirtiéndose que en todos ellos se contiene una cláusula relativa a la obligación de pago por el trabajador de las cotizaciones de seguridad social, que no fueron oportunamente enteradas.

**Duodécimo:** Que, por consiguiente, sólo procede ordenar el pago de las cotizaciones de cesantía correspondientes a toda la vigencia de la vinculación contractual, equivalente al 3% de la remuneración imponible, y con los reajustes e intereses antes precisados, eximiendo a la demandada de las previsionales y de salud, considerando la obligación adquirida por el actor en cada uno de los convenios a honorarios.

**Decimotercero:** Que las razones entregadas son suficientes para dar lugar al arbitrio deducido por la Municipalidad de Chillán, por cuanto el fallo impugnado





dio lugar al entero de las cotizaciones de seguridad social sin efectuar la distinción antes desarrollada, incurriendo en una errada interpretación de las disposiciones aplicables, con influencia sustancial en lo dispositivo.

Por estas consideraciones y disposiciones citadas, **se acoge** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada contra la sentencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, que se invalida, resolviéndose, en su reemplazo, que **se acoge parcialmente** el de nulidad deducido por la misma parte, en lo que concierne a la materia de derecho tratada, en contra del fallo pronunciado por el Juzgado de Letras del Trabajo de esa ciudad, de diez de febrero de dos mil veintitrés, por lo que se debe proceder acto seguido y sin nueva vista, a dictar el respectivo de reemplazo.

**Se previene** que la ministra señora Chevesich concurre a la decisión, pues se sustenta en una postura jurisprudencial que se encuentra uniformada por esta Corte, basada en la presunción de legalidad que justifica no dar lugar a la nulidad del despido

**Se previene** que la ministra señora Gajardo fue de opinión de limitar la condena al pago de la cotización del seguro de cesantía al equivalente a un 2,4% de la remuneración imponible de cargo del empleador, como había sido resuelto previamente por esta Corte, puesto que de ordenarse su solución también en la parte que la legislación puso de cargo del trabajador, se configura un pago doble que grava en forma desmedida y desigual al ente público.

Regístrese.

N°154.442-2023.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., y las Abogadas Integrantes señoras Leonor Etcheberry C., e Irene Rojas M. No firma la Abogada Integrante señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ  
MINISTRA  
Fecha: 23/07/2024 15:37:32

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ  
SANCHEZ  
MINISTRA  
Fecha: 23/07/2024 15:37:33



MARIA SOLEDAD MELO LABRA  
MINISTRA  
Fecha: 23/07/2024 16:01:43

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY  
COURT  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 23/07/2024 15:37:34



PRSFXXKEMTY

En Santiago, a veintitrés de julio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se dicta el siguiente fallo de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

**Vistos:**

Se elimina el fundamento séptimo de la sentencia de la instancia, y se reproducen los motivos tercero y séptimo a duodécimo de la de unificación que antecede.

**Y se tiene en su lugar, y, además, presente:**

Que, de esta manera, deberá acogerse la demanda interpuesta, declarándose la existencia de una relación laboral entre las partes y condenando a la demandada al pago de las prestaciones que serán precisadas a continuación.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8 y 425 y siguientes y 459 del Código del Trabajo, se declara que:

I.- Se acoge la excepción de prescripción opuesta por la demandada referida a la acción de cobro de feriados anteriores a agosto de 2020.

II.- Se da lugar a la demanda declarativa de relación laboral entre don Fabián Andrés Sarmiento Sanhueza y la Municipalidad de Chillán, vínculo que se extendió desde el 31 de julio de 2017 y el 22 de agosto de 2022, y considerando que su despido fue injustificado, se condena a la demandada a pagar las siguientes prestaciones:

- 1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo: \$1.000.000.
- 2.- Indemnización por años de servicios: \$5.000.000.
- 3.- Recargo del 50%: \$2.500.000.
- 4.- Feriado legal: \$1.399.986.

Las sumas señaladas precedentemente serán pagadas con los reajustes correspondientes, y con los intereses respectivos desde que quede ejecutoriada la presente resolución, según lo disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

5.- Cotizaciones correspondientes al seguro de cesantía por todo el período trabajado, que devengarán los reajustes que ordenan los artículos 19 del Decreto Ley N°3.500 y 22 de la Ley N°17.322, calculados desde la época y en la forma que indican, e intereses determinados conforme lo dispone el artículo 63 del Código del Trabajo, y únicamente desde la época en que esta sentencia quede ejecutoriada, sin considerar la aplicación de multas.

III.- Se rechaza en lo demás la demanda.

IV.- Cada parte soportará sus costas.



V.- Una vez firme y ejecutoriada la presente sentencia, remítanse los antecedentes a cobranza y a la respectiva institución previsional según lo dispone el artículo 461 del Código del Trabajo.

**Se previene** que la ministra señora Gajardo fue de opinión de condenar a la demandada a pagar por concepto de seguro de cesantía el 2,4% de la remuneración imponible de cargo del empleador, tal como precisó en el fallo de unificación.

Regístrese y devuélvase.

N°154.442-2023.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., y las Abogadas Integrantes señoras Leonor Etcheberry C., e Irene Rojas M. No firma la Abogada Integrante señora Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.

GLORIA ANA CHEVESICH RUIZ  
MINISTRA  
Fecha: 23/07/2024 15:37:36

ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ  
SANCHEZ  
MINISTRA  
Fecha: 23/07/2024 15:37:36

MARIA SOLEDAD MELO LABRA  
MINISTRA  
Fecha: 23/07/2024 16:01:46

ROSA MARIA LEONOR ETCHEBERRY  
COURT  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 23/07/2024 15:37:37



En Santiago, a veintitrés de julio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

